



“Al servicio de la Justicia y de la Paz Social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADA PONENTE
ALBA LUCIA GOYENECHE GUEVARA

Medellín, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

Radicación No.	05001-31-03-016-2017-00033-01
Proceso	Ejecutivo
Demandante	Viviana Andrea Piedrahita Alarcón
Demandados	Jair Sarmiento González
Procedencia	Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín
Decisión.	Confirma la sentencia apelada.
Síntesis	Ante el principio de literalidad de los títulos valores, así como la presunción de veracidad que reviste a los mismos, cuando se aduzca que lo incorporado en los mismos difiere de la realidad, debe acreditarse de tal manera que pueda contrariarse dicho principio y derrumbarse la referida presunción
Aprobación.	Proyecto aprobado en sesión virtual del día 24 de julio de 2023.
Rdo. Interno	112-18
Sentencia n°	036-23

Conoce la Sala del recurso de APELACIÓN interpuesto por la parte demandada, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín, en audiencia celebrada el 19 de septiembre de 2018, dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado por la señora VIVIANA ANDREA PIEDRAHITA ALARCÓN en contra del señor JAIR SARMIENTO GONZÁLEZ.

1. ANTECEDENTES

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

La señora VIVIANA ANDREA PIEDRAHITA ALARCÓN, por intermedio de apoderado judicial, formuló demanda ejecutiva en contra del señor JAIR SARMIENTO GONZÁLEZ, con fundamento en los siguientes supuestos fácticos (Fol. 1 a 13 y 17 a 23, Cdo. Ppal):

El 21 de mayo de 2014, el demandado suscribió los pagarés adunados a la demanda como base de recaudo, obligándose a pagar la suma de \$700.000.000 el 21 de mayo de 2016, así como intereses de plazo a la tasa del 2% mensual anticipado, y de mora al vencimiento del término o si dejaba de pagar capital o los intereses pactados.

En consecuencia, solicitó el demandante se librara mandamiento de pago, por las siguientes sumas de dinero:

1. \$50.000.000, como capital, contenido en el pagaré No. 1; más los intereses moratorios a partir del 22 de mayo de 2014, hasta el pago total de la obligación.
2. \$50.000.000, como capital, contenido en el pagaré No. 2; más los intereses moratorios a partir del 22 de mayo de 2014, hasta el pago total de la obligación.
3. \$50.000.000, como capital, contenido en el pagaré No. 3; más los intereses moratorios a partir del 22 de mayo de 2014, hasta el pago total de la obligación.
4. \$50.000.000, como capital, contenido en el pagaré No. 4; más los intereses moratorios a partir del 22 de mayo de 2014, hasta el pago total de la obligación.
5. \$50.000.000, como capital, contenido en el pagaré No. 5; más los intereses moratorios a partir del 22 de mayo de 2014, hasta el pago total de la obligación.
6. \$50.000.000, como capital, contenido en el pagaré No. 6; más los intereses moratorios a partir del 22 de mayo de 2014, hasta el pago total de la obligación.

7. \$50.000.000, como capital, contenido en el pagaré No. 7; más los intereses moratorios a partir del 22 de mayo de 2014, hasta el pago total de la obligación.
8. \$50.000.000, como capital, contenido en el pagaré No. 8; más los intereses moratorios a partir del 22 de mayo de 2014, hasta el pago total de la obligación.
9. \$50.000.000, como capital, contenido en el pagaré No. 9; más los intereses moratorios a partir del 22 de mayo de 2014, hasta el pago total de la obligación.
10. \$50.000.000, como capital, contenido en el pagaré No. 10; más los intereses moratorios a partir del 22 de mayo de 2014, hasta el pago total de la obligación.
11. \$50.000.000, como capital, contenido en el pagaré No. 11; más los intereses moratorios a partir del 22 de mayo de 2014, hasta el pago total de la obligación.
12. \$109.500.000, como capital, contenido en el pagaré No. 12; más los intereses moratorios a partir del 22 de mayo de 2014, hasta el pago total de la obligación.
13. \$40.500.000, como capital, contenido en el pagaré No. 13; más los intereses moratorios a partir del 22 de mayo de 2014, hasta el pago total de la obligación.

Además, solicitó se condenara al demandado al pago de las costas que se causaran en el presente asunto.

1.2. MANDAMIENTO EJECUTIVO

El juzgador de primera instancia libró la orden ejecutiva en proveído del 23 de febrero de 2017, por la suma de \$700.000.000, como capital incorporado en los pagarés acompañados a la demanda, más los intereses moratorios causados a

partir del 22 de mayo de 2016, hasta la cancelación total de la obligación, a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera (Fol. 29, Cdno. 1).

1.3 EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA DEMANDADA.

Una vez notificado el ejecutado de la orden de apremio, dentro del término legal propuso los medios de defensa que nominó (Fol. 37 a 56, Cdno. Ppal.):

1.3.1. Falta de congruencia entre el importe del negocio suyacente que les dio origen y la valía total de los títulos valores objeto de recaudo. Excepción que se propone con fundamento en el numeral 12 del artículo 784 del Código de Comercio, en razón a que el monto real que le fue desembolsado al demandado por concepto de mutuo o préstamo de consumo celebrado con la demandante, ascendió a la suma de \$109.500.000, y además, se había exigido al deudor que suscribiera una compraventa con pacto de retroventa sobre el bien inmueble identificado con el folio de matrícula No. 020-1860 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro, lo cual fue acatado por el ejecutado debido a su situación económica en el momento y su escaso conocimiento en el tema de títulos valores y préstamos respaldados con venta-retroventa.

Sin embargo, la oficina de registro negó la inscripción de la escritura pública contentiva de la referida negociación con nota devolutiva del 12 de agosto de 2014, y posteriormente, esto es, el 24 de agosto de 2015, el demandado procedió a vender el citado inmueble a una persona jurídica, circunstancia en la que se fundamentó la demandante para promover tutela contra la oficina mencionada, donde se ratifica que el monto de la obligación era de \$109.500.000; no obstante, en cada uno de los pagarés suscritos por el demandado, se cita la escritura pública contentiva de la obligación que había dado origen a los mismos, se indicó que el valor era de \$700.000.000, existiendo una disparidad entre el capital de los títulos valores y la cifra del contrato de mutuo subyacente que originó los mismos.

1.3.2. Temeridad o mala fe de la ejecutante. La que soportó en que, el monto que se pretende cobrar por la demandante no coincide con el préstamo que recibió el demandado.

1.3.3. Cobro de lo no debido. La cual se cimentó en los fundamentos fácticos relacionados para las excepciones anteriores.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Cumplidas las ritualidades propias para esta clase de asuntos, conforme las previsiones de los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín, en audiencia celebrada el 19 de septiembre 2018, profirió la decisión que selló la primera instancia, declarando imprósperas las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado, ordenando seguir adelante la ejecución conforme lo dispuesto en el mandamiento de pago y condenando en costas a la parte vencida (Fol. 79 y Cd. Fol. 81, Cdno 1).

1.5. APELACIÓN Y ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.

En el mismo acto de la audiencia, el apoderado de la ejecutada interpuso recurso de apelación, manifestando como reparos frente a la sentencia:

- El juez otorgó validez a la confesión ficta o presunta de que trata el artículo 205 del Código General del Proceso, cuando el motivo de la inasistencia del demandado al interrogatorio, escapó a la voluntad del mismo, dado que se encuentra privado de la libertad en la Cárcel La Picota, circunstancia conocida en las diligencias adelantadas desde el mismo otorgamiento del poder a profesional del derecho para que lo representara en este asunto, lo cual estima constituye un caso de fuerza mayor; y si bien, se alude a todos los mecanismos que permitirían su comparecencia no obstante estar detenido, no se valora la pasividad de la demandante para ejecutarlos y del mismo juzgado, en cumplimiento de los deberes enunciados en el artículo 42 del Código General del Proceso.

Además, precisó que tratándose de una presunción legal, admitía prueba en contrario, y que en este caso, el demandado había demostrado efectivamente que el valor del negocio que originó los pagarés no había sido \$700.000.000, como lo afirma la parte demandante, sino \$109.500.000, con

las pruebas documentales allegadas, como lo son la escritura pública 1608 del 21 de mayo de 2014 y la acción de tutela formulada por la demandante en contra de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro; aunado al testimonio del señor Jesús Alberto González Sarmiento, y las contradicciones de la demandante en su interrogatorio y de quien fuera citado de oficio como testigo, señor Edison William Gómez Alarcón.

- Se le dio plena credibilidad al contenido de los trece (13) pagarés, a pesar de estar en contraposición con lo plasmada en la Escritura 1608 de mayo 21 de 2014; pero, además, el no considerarse que, se había esgrimido como defensa por el demandado, no haber recibido la suma de \$700.000.000, que se trata de una “negación indefinida”, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, no requiere prueba en contrario. Por tanto, afirma que había suficientes pruebas para que las excepciones del demandado prosperaran.

Dentro del término concedido en esta instancia al recurrente, para que ampliara los argumentos esbozados en primera instancia, como sustentación de sus reparos, expuso que (Archivo 20):

- En la sentencia de primera instancia, se había dado por sentado que la parte demandada tenía que probar que no había recibido la totalidad del monto incorporado en los pagarés objeto de recaudo, cuando se trataba de una negación indefinida, donde la carga de la prueba se trasladaba a la parte demandante, citando para respaldar este argumento la sentencia C-086 2016 de la Corte Constitucional.
- No existía dentro de las pruebas practicadas en el expediente constancia alguna que avalara que la ejecutante había desembolsado en favor del deudor la suma pretendida en este asunto; y, contrario sensu, si se habían aportado pruebas documentales contundentes que daban fe de que el negocio causal que dio nacimiento a los pagarés base de recaudo había sido por la cantidad de \$109.500.000.

2. CONSIDERACIONES.

2.1. PRESUPUESTOS PROCESALES. Revisada la actuación cumplida no se observa impedimento alguno para proferir sentencia de mérito, pues la demanda reúne los requisitos legales, su trámite se ha cumplido con sujeción al rito del proceso ejecutivo singular, ante juez competente, y están demostradas la capacidad para ser parte, para comparecer al plenario, así como el interés para obrar, tanto por activa como por pasiva. Además, no se advierte configurado algún vicio que afecte la validez del trámite, ni motivo para que el Tribunal se abstenga de resolver.

2.2. PROCESOS EJECUTIVOS. Por sabido se tiene que el litigio del tenor que nos ocupa reclama la existencia de una obligación clara, expresa y exigible que conste, entre otros, en un documento proveniente del deudor o de su causante y que constituya plena prueba en contra de él, siendo esa la razón para que con la demanda deba allegarse un documento de la condición anotada, ello según lo previene el art. 422 del C: G. del P. Por lo que, cualquier hecho que tienda a desconocer la existencia o exigibilidad de dicha obligación debe alegarlo y probarlo el ejecutado según lo reglado en el artículo 167 del C.G.P.

En el caso *sub-examine*, para invocar la ejecución se presentaron trece (13) pagarés: once (11), por valor de \$50.000.000; uno (1), por \$109.500.000 y el último por \$40.500.000, respecto de los cuales se propuso la discrepancia del monto contenido en los mismos, con el que realmente había sido el objeto del negocio causal.

2.3. LA APELACIÓN. La parte demandada, ante la falta de prosperidad de los mecanismos de defensa propuestos en contra de la ejecución y la orden de seguir adelante la ejecución, dispuestos por el juez *ad quo*, presentó recurso de alzada, reiterando los argumentos que soportaron los medios exceptivos y contravirtiendo la decisión del *iudex a quo*, por considerar que contiene incongruencias y falta de análisis probatorio.

Sobre los reparos, es preciso hacer las siguientes precisiones:

2.3.1. CONFESIÓN PRESUNTA. Al tenor de lo establecido en el artículo 205 del Código General del Proceso, que la inasistencia del citado a interrogatorio, hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, disposición que fue aplicada por el operador jurídico en el caso concreto, en razón de que el demandado no compareció al interrogatorio al que fue citado, presentando para excusarse, certificación del GRUPO DE GESTIÓN LEGAL DEL INTERNO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ, donde se indica que se encuentra privado de libertad en dicho complejo carcelario, desde el 21 de abril de 2015 (Fol. 82), la cual estimó el a quo, no constituía una fuerza mayor o caso fortuito, únicos eventos para eximirlo de las consecuencias que señala la citada preceptiva.

Sin embargo, considera el recurrente que no era procedente aplicar los efectos contemplados en dicha norma, por cuanto debió también valorarse la inercia de la parte demandante y del ente judicial para procurar la comparecencia de quien fuera citado, en atención a los deberes que le impone la ley para la verificación de los hechos que rodearon el debate jurídico.

Al respecto, baste señalar que, tal como lo indicó el juez de primer grado, el deber de procurar la comparecencia a interrogatorio recae sobre la parte que es citada, al tenor de lo establecido en el precepto 203 del Código General del Proceso, y no sobre la parte que solicita esta prueba, ni el juez que la decreta, y es precisamente por esta razón, que los artículos 204 y 205 del mismo compendio normativo, regulan de manera expresa las consecuencias procesales que se atribuyen al incumplimiento de dicho deber, así como las circunstancias que lo eximen. Por tanto, era deber legal del demandado, a través del profesional del derecho que asistía sus intereses, procurar rendir el interrogatorio al cual fue citado en estas diligencias, sin que se acreditara el agotamiento de trámite alguno tendiente a dicha finalidad, por lo que, dado el supuesto de hecho que contempla la norma, era procedente imponer las consecuencias o efectos jurídicos de ello se deriva.

Aunado a lo anterior, debe precisarse que, tratándose de una presunción, era factible que el ejecutado, a través de otras pruebas desvirtuara la misma; sin embargo, no arrimó pruebas suficientes para tal efecto, pues incluso la decisión adoptada en primera instancia no se fundamentó simplemente en esta presunción,

sino en la valoración en conjunto del acervo probatorio, siendo la referida presunción solo una de ellas, por lo que, aun omitiendo la aplicación de lo contemplado en esta normativa, la decisión sería la misma.

2.3.2. DISCREPANCIA ENTRE LOS TÍTULOS VALORES Y LA ESCRITURA CONTENTIVA DEL NEGOCIO CAUSAL. Considera el impugnante que fue acreditado de manera fehaciente que el valor del negocio causal, esto es, del préstamo o crédito de consumo, celebrado entre las partes, ascendió a la suma de \$109.500.000, como consta en la Escritura Pública 1608 del 21 de mayo de 2014 de la Notaría Sexta del Círculo de Medellín, y no a \$700.000.000, como lo afirma la demandante y se representó en los títulos suscritos por el demandado.

Para tal efecto, alude a la prueba documental consistente en copia de la citada escritura y de la tutela que presentó la acreedora en contra de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, donde se hace referencia a que el valor del acto de la compraventa con pacto de retroventa, era por la suma de \$109.500.000. Sin embargo, frente a los mismos debe señalarse que, con el acervo probatorio quedó acreditado que en la tutela se mencionó dicha cuantía, por ser el contenido en la escritura pública que se pretendía registrar, lo que se verificó con este documento, y que dicho valor correspondía al valor catastral del inmueble objeto del acto, como se evidencia al final de su contenido, tratándose de una costumbre de vieja usanza, para efectos de minimizar los gastos notariales y de registro, que fue aceptada por el juez de primer grado de cara a las reglas de la experiencia, consideración que esta Corporación tiene por acertada; por ende, de la valoración de lo estipulado en estos documentos no se logra demostrar lo pretendido por la parte demandada; máxime cuando, además, se tuvo como estipulación contra escritura, el párrafo incluido en cada uno de los pagarés donde se indica “*Este pagaré garantiza las obligaciones consignadas en la escritura pública número 1608 del 21 de Mayo de 2014, de la Notaría Sexta (6ª) de Medellín con un valor de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M.L.C. (\$700.000.000)*” –Subrayas fuera del texto-, conforme lo indicó de manera expresa el funcionario de primera instancia, con fundamento en la sentencia de constitucional 071 de 2004, de la Corte Constitucional, argumento al que se suma lo dispuesto en el precepto 254 del Código General del Proceso.

Igualmente, adujo que también podía colegirse el real monto del negocio, de las contradicciones en las que habían incurrido la demandante y su hermano Edinson William Gómez Alarcón, quien fuera citado de oficio como testigo, pues no coincidieron en sus versiones respecto de la titularidad del derecho de dominio sobre los dineros que afirman haber entregado al demandado en préstamo, ni acreditaron la procedencia de los mismos; respecto de estos aspectos, debe señalar el despacho que realmente no resultan relevantes para el supuesto fáctico que se pretende acreditar, más aún si se tiene en cuenta que si medio coincidencia respecto a que los dineros eran manejados por el citado señor Gómez Alarcón para dicha actividad, esto es, para realizar créditos “sobre inmuebles”, esto es, bajo la modalidad de la compraventa con pacto de retroventa y explicaron la procedencia de los mismos, sin que se exigiera arrimar prueba en este sentido, pues ello escapa de las probanzas que son objeto de debate.

Así las cosas, la discrepancia respecto al dueño de los dineros dados en préstamo, existente entre la versión de la demandada y su hermano, así como la ausencia de prueba frente a la procedencia de éstos, no desvirtuaba el monto plasmado en los títulos valores arrimados como base de recaudo.

Finalmente, con la declaración del señor JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ SARMIENTO, tampoco logró acreditarse el supuesto alegado como defensa por el demandado, pues contrario a lo afirmado por el recurrente, éste no puede considerarse como un testigo presencial respecto de ese hecho, esto es, del monto que le fue entregado al demandado por el señor ALEJANDRO GALLO, quien afirma fue intermediario en la negociación, dado que afirmó que en el momento preciso en que se produjo la entrega del dinero, no sólo no estaba presente, ya que la misma se produjo en el vehículo del mencionado intermediario y él esperó en la sede de la Notaría, sino porque además no procedió a contarle de manera inmediata, sino mucho después de haber llegado a su residencia y ser entregado por parte de su hermano, el señor JAIR SARMIENTO GONZÁLEZ.

Ahora, con relación al cuestionamiento que se hace a la afirmación que realizó el juez de primera instancia en cuanto a la ausencia de prueba de haber recibido el demandado el dinero, así como a la ausencia de prueba de que no lo recibió, debe apartarse esta Corporación de la misma, pues contrario a esta apreciación, estima

este cuerpo colegiado que sí está acreditado en este asunto, que el demandado recibió la suma de \$700.000.000, con la suscripción de los títulos valores, los cuales gozan de la presunción de autenticidad y veracidad de su contenido, conforme lo reseñado en el precepto 244 del Código General del Proceso, sin que en este caso concreto, como se expuso con antelación, fuera desvirtuada por el ejecutado, sobre quien recaía la carga de probarlo al tenor de lo establecido en el artículo 167 *ibídem*, contrario a lo afirmado por el vocero judicial impugnante.

Al respecto, debe precisarse que si bien, al tenor de lo establecido en la citada norma, las negaciones indefinidas no requieren prueba, en este caso, no era esto lo que debía probar el demandado, pues lo que se exige es una prueba, como viene de señalarse, que desvirtúe lo contenido en los pagarés objeto de recaudo, específicamente en cuanto a su importe, por cuanto al imponer la firma el deudor sobre cada uno de ellos, sin refutar dicho valor, declaró aceptarlo y, por ende, dar veracidad al mismo.

Así, es a quien alega la excepción de mérito para desvirtuar la ejecución, a quien corresponde la carga de probar fundamentos fácticos que soportan su defensa. Lo indica el artículo 167 citado cuando señala *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*. Carga que no cumplió la parte demandada.

3. CONCLUSIÓN.

Corolario de todo lo desarrollado precedentemente, no hay lugar a variar la decisión de primera instancia, en la medida que los reparos expuestos por la parte apelante, no tuvieron la fuerza suficiente para derruir los fundamentos en los que se edificó la decisión del juez *a quo*. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en Sala Tercera de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

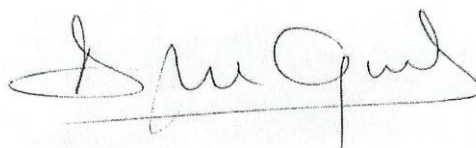
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín, en audiencia celebrada el 19 de septiembre de 2018, dentro del proceso EJECUTIVO singular instaurado por la señora VIVIANA ANDREA PIEDRAHITA ALARCÓN en contra del señor JAIR SARMIENTO GONZÁLEZ, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se condena en costas a la parte apelante. Se fijan como agencias en derecho la suma equivalente a DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, esto es, DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$2.601.212). Liquídense en primera instancia.

TERCERO: Ejecutoriada la presente decisión, devuélvase el expediente híbrido a su lugar de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



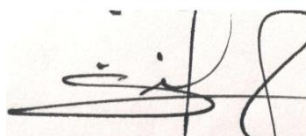
ALBA LUCÍA GOYENECHÉ GUEVARA
Magistrada

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022



MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022



(Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022)

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO
Magistrado